



ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO PARA OBTENER ÓRDENES JUDICIALES PARA QUE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES PUEDAN ACCEDER A LOS CENTROS DE TRABAJO PARA CUMPLIMENTAR LOS TRÁMITES INVESTIGATIVOS. INSTRUIR A DICHA DIVISIÓN PARA QUE OBSERVEN Y VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO CON LAS DECISIONES Y ÓRDENES, MATERIAL INFORMATIVO.

**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
NÚMERO: 2012-01-A**

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Nuestra Ley Orgánica fue aprobada el 8 de mayo de 1945 con el propósito de regular las relaciones obrero-patronales en Puerto Rico. En ese momento histórico, no existían leyes en Puerto Rico que protegieran a los trabajadores. Ese estado de indefensión de los obreros permitía que la clase privilegiada estableciera niveles de compensación sumamente bajos y condiciones de trabajo altamente riesgosas, discriminatorias, denigrantes y en muchas ocasiones inhumanas.

Hoy en día las condiciones laborales de la fuerza trabajadora han mejorado considerablemente. No obstante, ante los retos que representan los cambios de los nuevos tiempos, las relaciones obrero-patronales no siempre son armoniosas. Ante esto, la función de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, aún sesenta y seis años después de la aprobación de su Ley Orgánica tiene plena vigencia.

Este Organismo que administra la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico así como la Carta de Derechos de Empleados Miembros de una Organización Laboral, vela por el cumplimiento de sus preceptos, cuyo propósito es el ordenamiento de las relaciones entre patronos y trabajadores, con miras a reducir al mínimo las causas de las disputas obrero-patronales, mantener así la paz industrial que fomenta el máximo desarrollo de la producción, y en consecuencia, facilita la elevación de los niveles de vida de nuestra creciente población.

Es el interés de este Organismo asegurarse que sus Determinaciones y Órdenes finales y firmes sean cumplidas. Por lo cual, resulta forzoso, encomendarnos dicha tareas de asegurarnos de que los fines legítimos que rezan dichos mandatos sean llevados a cabo. Por lo cual, esta Junta, le delega al Presidente la tarea de que la División de Investigaciones acuda a los centros de los Patronos y Representantes de los diversos gremios sindicales para asegurarse que las Decisiones y Órdenes se cumplan tal y como lo mandata las normativas aplicables.

Por otro lado, muchos de los reclamos que traen la ciudadanía sujeta a nuestra jurisdicción emanan de las condiciones de trabajo las cuales alegan ser sometidos o imposibilitados de brindar. Por lo cual, resulta necesario que para la búsqueda de la verdad y donde el trámite investigativo sea uno exhaustivo,

SPL
PN
[Signature]

completo y sobretodo imparcial. Por lo que, para cumplir lo encomendado resulta necesario para obtener una Orden Judicial de los Tribunales de Puerto Rico según establecidas en las leyes aplicables.

La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm.130 de 8 de mayo de 1945 dispone lo siguiente:

Art. 7- Facultad de la Junta para Evitar Prácticas Ilícitas de Trabajo y llevar a cabo Investigaciones.

- 
- (a) La Junta tendrá facultad, según se dispone más adelante en la presente, para evitar que cualquier persona se dedique a cualesquiera de las prácticas ilícitas de trabajo que se enumeran en el Artículo 8.
 - (b) La Junta tendrá facultad para llevar a cabo una investigación preliminar de todos los cargos y peticiones que se radiquen [...]
 - (c) A los fines de todas las audiencias e investigaciones que en opinión de la Junta sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley, la Junta o sus agentes o agencias debidamente autorizadas, tendrá en todo tiempo razonable, con el fin de examinarla, y con derecho a copiarla, acceso a cualquier evidencia de cualquier persona que esté siendo investigada o contra la cual se haya precedido y que se refiera a cualquier asunto que esté investigando la Junta o que esté en controversia.

Por otra parte, siendo nuestro organismo uno cuasijudicial es de aplicación a sus procesos la Ley Núm. 170 de 1988, según enmendada y también conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico, el cual establece en sus secciones lo siguiente:

Sección 2102

(k) Proc. Adm.- significa la formulación de reglas y reglamentos, la adjudicación formal de toda controversia o planteamiento ante la consideración de una agencia, el otorgamiento de licencias y cualquier proceso investigativo que inicie una agencia dentro del ámbito de su autoridad legal.

Sección 2191- / |Subcapítulo VI Fiscalización e Inspección y Gestiones Conjuntas |

Las agencias podrán realizar inspecciones para asegurarse del cumplimiento de las leyes y reglamentos que administran y de las resoluciones, órdenes y autorizaciones que expidan, sin previa orden de registro o allanamiento, en los siguientes casos:

- (a) Emergencias o que afecten la seguridad o salud pública.
- (b) Al amparo de facultad de licenciamiento [...]
- (c) En casos en que la información es obtenible a simple vista o en sitios públicos por mera observación.

El Artículo II, Sección 10 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, consagra la protección contra registros y allanamientos irrazonables. Esta garantía se extiende para proteger a los ciudadanos contra citaciones irrazonables de las agencias administrativas.

A tenor con la Constitución, la responsabilidad de un requerimiento administrativo depende de que concurren ciertas circunstancias: la investigación ha de estar dentro de la autoridad legal de la agencia; el requerimiento no debe ser razonablemente pertinente al asunto específico que se investiga.

La Constitución *supra* exige que todo registro, incluyendo el administrativo, se haga en virtud de una orden judicial previa basada en causa probable. La jurisprudencia ha establecido que una autorización legislativa para efectuar un registro no exime necesariamente a la agencia administrativa de obtener una orden judicial de allanamiento.

Este principio constituye excepciones en ciertas ocasiones, a saber:

- 1) Cuando éste es consentido directa o indirectamente;
- 2) Cuando existen circunstancias apremiantes, o
- 3) Cuando el peso de los intereses requiere otra solución.

También es conocido que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme *supra* autoriza a las agencias a realizar inspecciones para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que administra, así como de las órdenes que expidan. No obstante, las agencias deberán solicitar una orden previa de registro para realizar una inspección.

En el caso *ELA v. Coca Cola Bottling Co.* 115 DPR 197 (1984) el Tribunal Supremo de Puerto Rico, determinó que cuando la solicitud de orden de registro se base en la supuesta violación de alguna disposición legal, no basta con que la Agencia afirme que tiene motivos fundados para creer que los requeridos han violado alguna ley o reglamento. Ha de explicar en que se basan esos motivos, la naturaleza de la supuesta violación y la fecha de su ocurrencia, hasta donde alcance la información en su poder; además se informará la fecha en que advino conocimiento de la misma, el día, hora y objetivo de la inspección, su pertinencia y la autorización estatutaria en virtud de la cual se realiza el registro.

Para garantizar nuestra misión y visión se hace necesario delegar al Presidente o su Representante Autorizado para que acuda al Tribunal General de Justicia de Puerto Rico cuando entienda que existe motivos que fundamenten el acceso a un centro de trabajo para garantizar la plenitud del trámite investigativo.

SE RESUELVE

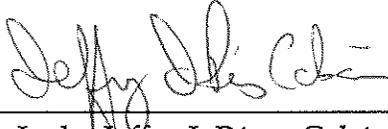
Se le delega al Presidente la Facultad de acudir al Tribunal General de Justicia de Puerto Rico para obtener una orden, cuando a solicitud del/la Director(a) de la División de Investigaciones se entienda que su visita será una que cumplirá con la más cabal transparencia y efectividad en el trámite investigativo y garantizar la búsqueda de la verdad.

Dicha División deberá hacer la solicitud al Presidente, quien lo evaluará y determinará a su discreción de instruir la búsqueda de dicha Orden ante el Tribunal. Se delega al Presidente para que a su vez le encomiende a la División de Investigaciones para que una vez una Decisión y Orden de esta Junta sobre Cese y Desista de una Practica Ilícita bajo la Ley 130 y/o la Ley 333, puedan acudir a los centros del Patrono u Organización Obrera según sea el caso para asegurarse que tal mandato sea cumplido, así como verificar que los materiales informativos sobre los derechos y obligaciones que establecen las normas que

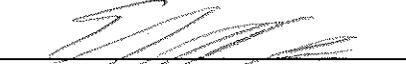
administramos en la Junta este en un lugar visible. Para lo cual, la División de Secretaría deberá una vez una Decisión y Orden emitida en un caso advenga final y firme deberá remitir copia de dicho documento a la División de Investigaciones para que inicie el proceso aquí establecido. Los/Las Director(a)s de las Divisiones de Secretaría e Investigaciones determinarán en consulta con el Presidente cualquier medida necesaria para delimitar los propósitos aquí consignados.

Regístrese y Notifíquese. Publíquese además inmediatamente en la página electrónica de la Junta de Relaciones del Trabajo.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de Octubre de 2012.



Lcdo. Jeffrey J. Pérez Cabán
Presidente



Lcdo. Edwin R. Viñas López
Miembro



Sr. Harry O. Vega Díaz
Miembro